
Transición política y recomposición sindical Reflexiones desde Bolivia

Tom Kruse**

Introducción

Uno

El lunes 17 de enero de 2000 se inició en la ciudad de El Alto el XII° Congreso Ordinario de la Central Obrera Boliviana (COB). En los días anteriores ya se anunciaba que no sería un Congreso simple: varios sectores importantes anunciaban su inasistencia, y sectores campesinos del altiplano exigían una vez más cambios en la estructura orgánica que les impiden asumir la dirigencia de la ente matriz. Ni se logró conformar un *presidium* legítimamente: de las 63 organizaciones, sólo votaron 31. A los 3 días, 22 organizaciones se irían del Congreso; se declararían un cuarto intermedio de 90 días, y retomar el Congreso en Potosí -donde también habrían de fracasar los intentos por llevar a cabo el Congreso. Comentó un dirigente: “El XII° Congreso nació muerto”. En abierta actitud de burla, observadores y analistas en los medios hablaron de la “muerte cerebral” de la COB¹.

¹ El autor quiere agradecer los comentarios, críticas y estímulos de Carlos Arze, Ricardo Calla, Silvia Escobar, Alvaro García, Raquel Gutiérrez, Fernando Mayorga, Lourdes Montero, Oscar Olivera, José Seoane, Carlos Villegas y Fernanda Wanderley. Desde luego, cualquier error u omisión es la responsabilidad exclusiva del autor.

² Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) en La Paz.

Dos

El lunes 10 de abril de 2000, desde el balcón de la Federación de Fabriles de Cochabamba, el dirigente de dicha federación se dirige a una multitud de más de 70.000 personas para declarar una victoria: el sistema de agua de la ciudad, recién concesionado a un consorcio montado por la Bechtel Corporation de Estados Unidos, sería ahora desprivatizado, y la legislación sobre agua potable sería cambiada según las demandas de los campesinos de la región. Movilizaciones de creciente magnitud y militancia desde enero de 2000 habían culminado en 5 días de feroces batallas callejeras contra policías y efectivos militares, con un saldo de un muerto y docenas de heridos de bala. Días antes, en pleno estado de sitio, efectivos de la policía de élite en La Paz iniciaron una huelga por aumentos salariales; concedido el aumento de 50%, salieron a reprimir. En tanto, en el altiplano se levantaron la comunidades de Achacachi; la represión militar dejó un saldo de 4 muertos. En abierta actitud de perplejidad, observadores y analistas en los medios concedieron que, tal vez, la historia no había llegado a su fin, mientras que otros anunciaron la primera rebelión del nuevo milenio.

El problema

La yuxtaposición de estas imágenes estilizadas es deliberada: mientras la COB deambula sin rumbo ni dirigencia, el país revienta en escenarios de conflictividad que producen, por primera vez desde 1985 y “el ajuste”, una ruptura en el *zeitgeist*. Dos cosas quedan claras: por un lado, desde las calles y campos la gente había anunciado algún límite “del modelo”; por el otro habían demostrado que estas conflictividades tienen una relación débil y ambigua con los sindicalismos y lo que queda de la COB. Sobre esta tensión -COB descendente, malestar y conflictividad ascendente- se debate la crisis y el futuro del sindicalismo en Bolivia hoy. Detrás de esta tensión yacen preguntas profundas: ¿cuál es la relación entre los “actores emergentes” de los conflictos recientes y el mundo del trabajo? Y más a fondo, como se preguntaba Laís Abramo “... quanta pobreza, quanta exclusão, pode aguantar uma democracia?” (Abramo, 1999: 42).

En este ensayo pretendemos juntar algunos elementos para este análisis. Miramos primero hacia atrás al nacimiento y desarrollo de la COB, perfilando brevemente el proceso de “continuidad de rupturas” (Dunkerley, 1992: 181)² en el cual la COB en su relación con el estado de la Revolución Nacional, erigiría un corporativismo *sui generis*, necesario para entender lo peculiar de “la transición” boliviana en 1982. Mientras la COB, jugó un rol decisivo en el proceso político para conquistar la democracia, “el ajuste” de 1985 resultaría ser una democracia “necesariamente” neoliberal, cuyo *sine qua non* era la extinción de la COB como actor político.

Luego, revisaremos brevemente los cambios en los procesos productivos industriales y el mercado de trabajo desde 1985, un período marcado por la “estabilización sin reactivación”. Detrás de la no-reactivación se darían cambios importantes -de precarización, informalización, polarización, y exclusión- que, a la vez, complejizaran significativamente el terreno de una “reconstitución sindical”. Para concluir, revisaremos tres “campos” de debate-propuesta sobre la crisis del sindicalismo hoy en Bolivia (tomado de Arze Vargas, 2000), y las visiones y estrategias emergentes de dirigentes fabriles de tres Federaciones de Fabriles diferentes.

Concluimos que, aunque hay rebrotes de conflictividad y emergencia de nuevos actores, estamos todavía lejos de iniciar un proceso claro de recomposición sindical en el ámbito productivo urbano. Los cambios observados en los procesos productivos tienden a dificultar esta recomposición, introduciendo ambigüedades a la relación entre el mundo del trabajo y la acción colectiva y política. Con la disolución de la COB, las federaciones y sindicatos en la práctica ingenian sus propias estrategias sindicales. Estas estrategias tienden a ser improvisadas, defensivas y reactivas, y tienden a divergir de las estrategias más políticas del pasado, aunque más por necesidad que por una opción política o ideológica. No obstante, mostramos que en algunos casos el entorno conflictivo y la ausencia de un discurso ordenador impuesto “desde arriba” conducen a búsquedas fructíferas.

Antecedentes

En el centro de la “transición política y recomposición sindical” en el caso boliviano, hay una paradoja. En Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) era un movimiento sindical, y su matriz ordenadora “... la autora principal de la recuperación de la democracia actual en Bolivia...” (Calla, 2000: 218). No obstante, a pocos años esta “autora” sería una de las primeras víctimas de esta flamante democracia en su fase “neoliberal”. El “proceso de ajuste” económico en Bolivia, iniciado en plena democracia en 1985 con el Decreto Supremo N° 21060, presuponía y requería una radical desmovilización y desarticulación de la COB. La devaluación y contracción requeridas por los arquitectos del ajuste no permitirían inelasticidades no-naturales en la fijación de los precios, o ataduras a la discrecionalidad ejecutiva desde la sociedad. En este sentido, se estaba cerrando también un capítulo de la historia contemporánea boliviana, el del ciclo del “estado del ‘52”.

Este estado y la misma COB nacerían bajo el impacto del acontecimiento histórico más importante de la historia social boliviana desde la fundación de la república, la Revolución Nacional de abril de 1952. Con las revoluciones de México, Cuba y Nicaragua, la revolución en Bolivia representa uno de los procesos de transformación social más importantes de América Latina en el siglo XX. Conce-

bido inicialmente como un golpe, se convertiría en un alzamiento popular armado de mineros, fabriles, y luego campesinos, que rebalsaría las intenciones de los golpistas. Llevaría a la nacionalización de las minas de los barones del estaño (“la rosca”) y su conversión en empresas estatales bajo la dirección de un estado desarrollista. Iniciaría procesos de ciudadanía (educación, sufragio) y reforma agraria (en 1953), que incorporarían al proceso histórico boliviano a masas de campesinos y mineros, hasta entonces excluidos³. Los pilares del nuevo modelo era capitalismo de estado en lo económico, corporativismo-prebendalista en lo político, y nacionalistas-modernizante en lo ideológico.

Las tensiones internas de este modelo no tardarían en manifestarse. Malloy y Gamarra (1988) argumentan que los ciclos de conflicto, ruptura e inestabilidad del “estado de ‘52” pueden ser explicados por las oscilaciones entre las demandas de la acumulación (el estado como “capitalista general”) y legitimación (el estado como rector de un aparato “neopatrimonialista” cada vez más costoso) en un contexto de creciente dependencia. El sostén económico serían las empresas recién nacionalizadas, sobre todo la minería. Sin embargo, su manejo bajo criterios políticos, divorciados en mayor o menor grado de una lógica de acumulación, conduciría a una descapitalización de las minas (Klein, 1992: 267). Al mismo tiempo, esto colocaría a Bolivia y al estado boliviano en una posición cada vez más dependiente ante sus acreedores bilaterales, multilaterales, y frente a la “asistencia” de EE.UU., felices de usar la ayuda y endeudamiento como instrumento político en plena guerra fría (Eckstein, 1985: 483-86; 1976: 37; Kofas, 1995; Morales and Sachs, 1989: 179)⁴. Las políticas del estado oscilarían cíclicamente entre la disciplina fiscal exigida por sus acreedores, y “concesiones” a la COB. Como afirma Nash,

“... Los cambios rápidos en las relaciones estructurales entre el movimiento laboral y el gobierno nacional (...) respondían a las políticas vacilantes por medio de las cuales el gobierno intentaba en vano balancear los intereses internos de la fuerza de trabajo y las demandas externas de sus acreedores extranjeros. La imposibilidad de equilibrar estos intereses diametralmente opuestos condujo a una situación política polarizada y una serie de golpes constantes...” (Nash, 1979: 268).

Cómo la COB -a diferencia de otros entes sindicales matrices en América Latina- era capaz de ejercer una presión tan contundente y sostenida, requiere una mención. Nacido al calor de la revolución⁵, se crea también con una extraordinaria autoridad moral que se convertiría en rol de “co-gobernante” en el nuevo estado, inicialmente -sugiere Lazarte- por principios, pero luego crecientemente por las “‘ventajas’ inmediatas y sectoriales” que permitía extraer al estado (Lazarte Rojas, 1989: 129-130). En su primera década en el poder, la COB pondría dos vice-presidentes, más de 15 diputados, varios senadores, directores de empresas estatales, y una presencia permanente en los ministerios con los “ministros obreros”

(Nash, 1992: 4). En las empresas mineras del estado se instituyó el “control obrero”, que permitía un voto por parte de la COB en decisiones empresariales. Pero la inoperancia de estos mecanismos se revelaría rápidamente, y dentro de menos de 10 años, el “cogobierno” adquiriría una connotación negativa, en el movimiento sindical. Concluye Nash: “... el movimiento laboral dio un giro de participación en un gobierno reformista de clase media, a una estrategia de rebelión para defender los intereses de clase...” (Nash, 1979: 292).

El rol que jugaría la COB nunca era ni sería simplemente “económico”. Al desgastarse este rol de cogobernante, emergerían otros -más radicales- pero sin abandonar por completo elementos corporativos en su relación con el estado⁶. Y con la continuidad de rupturas, crecientemente estaría marcado por momentos de represión feroz, en los cuales la distinción entre objetivos sindicales “económicos” y “políticos” tendería a desaparecer.

El epicentro de esta condensación eran las minas y los mineros, trabajadores en una economía de capitalismo de estado de enclave. Nash (1979) y García Linares (2001) destacan varios elementos que contribuirían a la formación de una experiencia y construcción de clase particularmente potente: los mineros vivían en concentraciones masivas; con contratos indefinidos disfrutaban una estabilidad social y previsibilidad en el tiempo; las formas de trabajo y convivencia cotidiana formaron un fuerte tejido social y fidelidades internas. Con abundante evidencia etnográfica, Nash enfatiza la reelaboración de culturas andinas en contextos industriales de dramática explotación, que producían y sustentaban la comunidad, y una economía moral, sistemáticamente violentada. Resume la autora:

“... Las costumbres y creencias [de una vida rural del pasado reciente] eran tan importantes como las nuevas ideologías revolucionarias, a las cuales fueron expuestas en el contexto industrial. Imperativos morales más que racionalidad socialista dominaba su conciencia mientras buscaban soluciones colectivas a sus problemas de sobrevivencia...” (Nash 1992: 3).

En y sobre este tejido se construía un sindicalismo en el cual se fusionaban los derechos sindicales con los ciudadanos -es decir, ser miembro de sindicato era la “carta de ciudadanía” y el escenario de reconocimiento social y político. El sindicalismo tenía características prácticas organizativas que reforzaban esto: estaba basado en la empresa, es decir, en relaciones gruesas y directas; predominaba la asamblea y prácticas densas de participación directa en la toma de decisiones; a partir del sindicato se erigió de hecho una estructura organizativa sólida, piramidal, que llegaría a abarcar casi todo el territorio nacional y todos los sectores.

Los mismos autores destacan varias construcciones discursivas importantes en el mundo de las minas, que se irradiarían por todo el movimiento sindical y la estructura cobista. Estos discursos estructuraban, condensaban y hacían inmediatamente “aprehensible” un sentido fuerte de la noción de clase, y en la cotidiani-

dad -en el trabajo, en la asamblea, en los conflictos constantes con el estado- se iba reactualizando. Cabe mencionar dos elementos. Primero, existía la idea de que el país dependía del trabajo de los mineros⁷, lo cual cotidianamente imbuía el trabajo con utilidad social, encontraba resonancia y amplificación en textos y posiciones políticas, y contrastaba cotidianamente con condiciones en que se trabajaba y vivía, revitalizando así la indignación. Por otro lado, estaba el hito fundacional de la revolución misma -prueba contundente de la eficacia de la acción colectiva- que encontraba su resonancia y reactivación en los sucesivos enfrentamientos con el estado, y en particular, en las masacres y episodios de represión.

Como demuestra Nash, la clase -entendida como una configuración de posicionamientos, prácticas, y predisposiciones- era un producto potente de una historia elaborado en el trabajo y la comunidad, en los intersticios de lo global y lo nacional, lo tradicional andino y lo moderno. Desde sus comunidades de densa interacción y en condiciones materiales y físicas adversas y de “crisis permanente”, los mineros enfrentaban a sus enemigos comunes en el gobierno y en el mercado internacional, produciendo, sugiere Nash, “...la fuerza de trabajo tal vez más iluminada aunque peor remunerada en América Latina...” (1979: 309). Esta “iluminación” no sería algo inevitable, deducible de una posición en las estructuras económicas, sino producto de los procesos cotidianos (de trabajo y vida comunitaria) y liminales (de conflicto, movilización y masacre). Concluye Nash, “... la fuerza del movimiento laboral extrae su sustento de [*draws upon*] la comunidad que permite a los trabajadores resistir las condiciones más opresivas y los ataques más agresivos...” (1979: 309). Dentro de la COB esta experiencia minera particular se elevaría a un modelo prescriptivo hegemónico (el deber ser del sindicato y del sindicalista) y se la institucionalizaría en mecanismos para garantizar que el proletariado mantenga una mayoría absoluta en la dirección de la COB, una práctica de subordinación exclusionista todavía muy problemática.

Bajo esta hegemonía, cíclicamente la COB -como indica García Linera (2001)- sería capaz de crear bloques sociales multisectoriales y de varias clases. El ejemplo más claro sería la lucha que dirigió por el retorno a la democracia contra la dictadura de Banzer (1971-1978). En resumen, a lo largo de los 33 años que contempla el ciclo del “estado del ‘52”, la COB jugaría una variedad de funciones, a veces contradictorias: aglutinante, pero productora de subordinaciones en su vanguardismo; contestataria, pero mediadora en sus negociaciones con gobiernos civiles; reivindicativa, pero delimitadora de lo reivindicable; y escenario de ciudadanía ante o inclusive contra el estado, pero con efectos “estatizantes” y desmovilizadores (García Linera, 1999: 52).

La transición y ajuste

Ante un movimiento arrollador encabezado por la COB, la dictadura de Banzer sería efectivamente derrocada en 1978, pero el retorno la demoraría tres años complejos en las cuales habría 3 elecciones, 6 golpes, 3 transiciones negociadas y 9 presidentes, culminando con la narco-dictadura de García Mesa. Instalado finalmente en 1982, el presidente Siles y su coalición -la Unidad Democrática Popular (UDP)- enfrentó la acumulación de 18 años de demandas reprimidas, endeudamiento crítico heredado del “banzerato”⁸, sequías desastrosas en el altiplano (1983), y caídas dramáticas en los precios de materias primas, en especial del estaño. Siendo una coalición débil, con liderazgo vacilante, y socios que jugarían con un pie adentro y otro afuera del gobierno, una asignación coherente de los costos de la debacle sería políticamente imposible. Al principio, la COB apoyaba al gobierno, pero en la medida en que se agudizaba la crisis económica le iba retirando su favor.

A partir de 1982 las transferencias netas de recursos del resto del mundo (nuevos préstamos menos el pago de interés) se volvieron negativos (de 3,1% de PIB en 1981, a -3,2% en 1982, y -6,9% del PIB en 1983), creando una brecha que el gobierno de Siles intentó cubrir con emisiones monetarias. El resultado era una hiperinflación de proporciones históricas, llegando a más de 180% por mes en 1985, producto no tanto de nuevos gastos o “concesiones” desmedidas a la COB, sino de la incapacidad de reducir gastos ante la caída de nuevos préstamos, la caída de la tributación, y el mayor servicio de la deuda (Morales and Sachs, 1989: 70).

De 1984 en adelante Bolivia enfrentaría una crisis espectacular: protestas diarias, la inseguridad y pérdida traumática que la hiperinflación engendra, y un gobierno vacilante⁹. Los costos para la COB serían altos también: la movilización constante contra los paquetes deflacionarios de Siles y la falta de un *endgame* -salida- tendía a un desgaste político y económico de sus bases. Llegado el momento, se encontraría sin recursos para resistir efectivamente el paquete mucho más radical.

Llegando a la presidencia en agosto de 1985, en menos de un mes el presidente Paz Estensoro introduciría una serie de medidas deflacionarias y contractionarias radicales (“el 21060”), un caso extremo del *shock treatment* aplicado en varios países de la región. En octubre la inflación se volvió negativa con la virtual desaparición de la demanda y del colapso de la resistencia de la COB. A partir de 1985 se inició la clausura de minas que operaban a pérdida y, dentro de los dos años, los despidos y el desempleo llegarían a 460.000 personas: 23.000 mineros de un total de 28.000 de la minería estatal, 6.000 de minas privadas, 10.000 de la administración pública, y 2.000 de los bancos, mientras más de 110 fábricas se cerraron. Con esto se produciría una de las mayores dislocaciones socio-productivas en la historia del país (Morales and Sachs, 1989; Dunkerley, 1992).

Mientras la Federación de mineros y la COB intentaban en vano resistir, miles de mineros “votaron con sus pies”, aceptando indemnizaciones y migrando a las ciudades principales del país y las zonas de producción de coca (Nash, 1992).

Efectivamente, con el desgaste del período de la UDP, más el cierre de las minas, el *sine qua non* del ajuste se logró: la desmovilización y derrota política de la COB. En años posteriores, los autores del 21060 explicitarían su carácter eminentemente político como precondition de su eficacia económica¹⁰. Se desataría un intenso debate, todavía vigente, en torno a la medida en que el desploma de la COB -y el difícil camino de su recomposición sindical- era producto de contradicciones y errores internos. De la izquierda tradicional señalarían la falta de liderazgo revolucionario; de la izquierda crítica citarían los orígenes corporativistas-colaboracionistas del proyecto populista-nacionalista como un limitante fatal a la iniciativa social desde abajo. Otros enfatizarían el debilitamiento por las prácticas pediguño-clientelares y/o exclusionistas-vanguardistas (la centralidad obrera, sesgo salarista, racismo y desprecio del campesinado, sexismo, etc.); y de la flamante derecha en su versión neoliberal -anunciando ahora el “fin de la historia”- insistirían en lo fatalmente anacrónico tanto de las formas (la “lógica de suma cero” y la falta de capacidad propositiva) como de los contenidos del sindicalismo (las tesis varias del “fin del trabajo”, y con ello, la de los sindicatos). En cualquier caso, la “autora” del retorno a la democracia había sufrido una derrota política, y la disolución de varias de sus bases materiales y vivenciales. Una pregunta central de aquel momento era: ¿cuánto *shock* puede aguantar la democracia? Es un hecho extraordinario que en democracia se logró la desmovilización de la COB casi sin sangre y con poca represión.

Ahora la pregunta, citada arriba, es otra: “¿cuánta pobreza y exclusión acumulada puede aguantar una democracia?”. El Dr. Jeffrey Sachs, co-autor del 21060, comentó retrospectivamente: “...Les dije a los bolivianos, desde un comienzo, que lo que Uds. tienen acá es una economía pobre, miserable, con hiperinflación; si Uds. son valientes, si tienen agallas, si hacen todo bien, terminarán con una economía pobre, miserable con precios estables...” (citado por Green, 1995: 6). Tenía razón: actualmente, después de 15 años de ajuste, el crecimiento ha alcanzado un promedio de 2,3% anual¹¹, bastante por debajo de las tasas de crecimiento de los años ‘60 y ‘70, y -dada la distribución crecientemente desigual de la riqueza y del ingreso- muy por debajo de lo que se necesita para enfrentar a la pobreza endémica (ver especialmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, 1998 y Escobar de Pabón, 2001). En el mismo período, los ingresos crecieron a una tasa del 0,4% por año, y se estima que algo más del 70% de los bolivianos viven por debajo de la línea de pobreza (CEDLA, 1999). Pero detrás de esta miseria estable hay procesos de cambio que reproducen y agudizan la polarización económica, la precarización laboral y la exclusión social. Entender las perspectivas de la precomposición sindical requiere conocer estos procesos.

Sindicalismos urbanos post-ajuste

Planteamos arriba que la economía de enclave minera había producido y sostenido una configuración potente (de enclave), luego irradiada por la COB. Ahora, esta configuración se desbarataría, dando lugar a preguntarse: ¿cuáles serían las nuevas configuraciones emergentes, los nuevos actores a surgir a partir del mundo del trabajo?

Las observaciones a continuación se limitan a un aspecto de los sindicalismos bolivianos hoy¹². El enfoque es sobre sectores productivos industriales, y deja de lado dos escenarios de suma importancia, pero más allá del alcance de este trabajo: los sindicatos de trabajadores de los sectores públicos (en particular de salud y educación), y el sindicalismo campesino. El primero es, lamentablemente, poco estudiado o conocido en su debida magnitud. Hoy por hoy son sectores de peso en términos cuantitativos y cualitativos, aunque tienen (como se menciona más adelante) una relación ambigua con los nuevos conflictos. El sindicalismo campesino es también un tema de fundamental importancia para el país. Producto de la revolución de 1952, la problemática rural-étnica-política se “campesinizó” y “sindicalizó” -es decir, quienes eran indios “se volvieron” campesinos, y se difundió y/o impuso la “forma sindicato” de organización rural- para incorporarse al aparato corporativo tanto de gobiernos civiles como militares, hasta 1974 y la ruptura del “pacto militar campesino”. Lo que se llamaría “sindicato rural” abarcaría un conjunto de procesos económicos, políticos y culturales sumamente complejos, y cuya relación con los sindicalismos urbanos tiene una historia conflictiva, y lejos de estar “resuelta”. La articulación posterior a 1974 del movimiento campesino con la COB, y su complejización con la emergencia de discursos y demandas étnicas, son procesos en los que se juega nada menos que la carga de más de 500 de exclusión racista -elementos centrales al proceso social boliviano, pero mas allá del alcance del presente trabajo. Las observaciones a continuación tienen, por tanto, un objetivo más limitado: compartir el estado del análisis sobre las transformaciones productivas industriales urbanas y las estrategias sindicales emergentes (o la falta de las mismas) a 15 años de distancia del ajuste.

Evolución y cambio en el aparato productivo

Grebe ha caracterizado el aparato productivo a los 15 del ajuste con la fórmula “10-100-500.000”, donde tendríamos:

- “...Diez empresas capitalizadas [privatizadas] con virtual control sobre los sectores estratégicos de la provisión de servicios básicos para la población y las empresas productivas, que se encuentran sometidas teóricamente a los mecanismos de regulación de reciente creación.
- Unos 100 grupos económico-financieros nacionales y extranjeros con presencia principalmente en la industria, la minería, la agricultura comercial y la banca.

- Un tejido intermediario sumamente débil, compuesto por muy pocas empresas, y muy alejadas del nivel tecnológico de la industria de los países vecinos.

- Algo más de 500.000 microempresas que operan en la agricultura, el comercio y la artesanía, en condiciones de muy baja productividad y limitadas capacidades de constituirse en las fuerzas motrices del cambio económico...” (Grebe López, 1998).

Recogemos este *snapshot* estilizado (“los 10”, “los 100”, y “los 500.000”) para identificar algunas tendencias de cambio productivo, que inciden sobre y reconfiguran el mundo del trabajo urbano.

“Los 10”

Con 8 años de ajuste, recién se logró proceder a la privatización de lo privatizable en Bolivia: aquellas empresas públicas apetecibles para la inversión directa extranjera. Este proceso, y el virtual cierre de las minas de la COMIBOL, marcará el cambio más significativo en cuanto al retiro del estado de las actividades productivas. Con el proceso de privatización, en 7 años \$1.600 millones de activos productivos públicos cambiarían a manos privadas, palanqueando en el proceso una cantidad similar de inversiones nuevas. Entre las empresas privatizadas estaban Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la aerolínea Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), la Empresa Nacional de Energía (ENDE), la empresa de telefonía de larga distancia (ENTEL), y los ferrocarriles.

La promesa electoral de los privatizadores era la de crear 500.000 trabajos nuevos, mientras reforzaba el sistema de pensiones, basado en formas peculiares de privatizar llamada “capitalización”. En esencia, se procedería a vender el 50% de las acciones al socio “capitalizador”, que se comprometería a un programa de inversión a cambio de un control gerencial total. De las demás acciones, 1% iría a los trabajadores de la empresa, y el restante 49% se distribuiría entre los ciudadanos mayores de edad, a ser manejado por Agentes de Fondos de Pensiones (AFPs), ahora bajo el control de inversionistas argentinos y españoles. En la teoría, las AFPs asignarían representantes de “los bolivianos”, quienes defenderían los intereses de los bolivianos en las mesas directivas de las empresas privatizadas. En la realidad, la falta de información precisa y puntual, y la designación clientelar de los asientos en los directorios, imposibilita una fiscalización real de las empresas privatizadas.

Con la privatización se han dado cambios importantes en los procesos productivos y la sindicalización. Las estrategias empresariales han partido de un combinación de i) “racionalización”, que en la práctica condujo al desmembramiento de varias empresas y a la “externalización” o “terciarización” de varias actividades; ii) la inversión en tecnología, la que permitiría una competitividad a

nivel internacional; y iii) la flexibilización laboral. Ejemplificador de estos procesos es YPFB, convertido en una empresa que administra contratos de concesión de actividades de exploración, explotación, transporte, refinación y distribución (Arze Vargas, 2000: 22).

El empleo entre “los 10” ha cambiado significativamente. A nivel de las tomas de decisión, los bolivianos casi sin excepción han sido reemplazados por extranjeros del país de origen de los capitales (italianos en telefonía, chilenos en ferrocarriles, estadounidenses en petróleo y gas, etc.). Por lo general, las “capitalizadas” han buscado firmar contratos colectivos que buscan por varios medios “racionalizar” y flexibilizar su fuerza de trabajo. Esto tiene por lo menos dos facetas: una flexibilidad funcional, con mayores exigencias, y una nueva polifuncionalidad de los empleados, que a nivel de técnicos no está reflejada con una mayor remuneración. Por el otro lado, una flexibilización numérica, lograda de varias maneras. Ejemplar en este sentido es ENTEL, que a través de “cambios de destino” de los trabajadores (al interior del país) en efecto induce la “separación voluntaria” de los trabajadores¹³.

En general, estas reestructuraciones han mantenido o reducido el empleo en las empresas privatizadas, conducido a la des-sindicalización de ciertas actividades, y dificultado la organización sindical nueva. También conlleva efectos secundarios. Por ejemplo, las exigencias de ENTEL a las cooperativas telefónicas locales las han inducido a competir en base a la reducción de costos laborales; la reciente instalación de líneas de fibra óptica en Cochabamba -exigida por ENTEL- se ha realizado con cuadrillas de ex-trabajadores de la empresa local bajo contratos no laborales, sino de servicios.

En resumen, y aunque faltan estudios más sistemáticos al respecto, algunas tendencias parecen claras entre “los 10”. Lejos de las promesas electorales todo indica que se ha mantenido o reducido el empleo en las empresas; el desmembramiento ha producido nuevas fragmentaciones y jerarquizaciones, colocando trabajadores en “núcleos” o “periferias”, lo cual reduce la densidad sindical y dificulta nuevas sindicalizaciones, y en varios casos degrada el trabajo dentro de las empresas (más trabajo a cambio del mismo o menos salario), mientras precariza e informaliza el trabajo anexo a las empresas.

“Los 100”

El segundo grupo -heterogéneo por cierto- en el esquema de Grebe son los “... 100 grupos económicos-financieros nacionales y extranjeros con presencia principalmente en la industria, la minería, la agricultura comercial y la banca...”. Con la apertura comercial se sufrió una marcada caída de sus actividades y la quiebra de muchos de ellos, aunque se ha ido recuperando en los últimos años. Aunque carecemos de estudios amplios sobre la evolución de estrategias empre-

sariales (Gittleman, Horrigan and Joyce, 1998) y sus impactos en el empleo, sí contamos con una serie de estudios puntuales en este grupo de industriales nacionales (Arze Vargas, 1997; Kruse, 1999; Escobar de Pabón, 2000). Estos estudios sugieren varias tendencias.

En primer lugar, la industria sigue siendo liviana, relativamente pequeña, y la innovación en cuanto a procesos y productos, circunscrita a un número reducido de las empresas más grandes. Sugiere Arze que en general las estrategias de competitividad se basan en incrementar el volumen de producción, mientras reducen mano de obra. Se ha detectado la incorporación de discursos sobre nuevas formas administrativas (el *just in time*, aplicación de la “calidad total”, etc.), pero las instancias de su aplicación parecen ser todavía pocas. En aquellos casos donde sí hay una incorporación de tecnología moderna, el mismo autor sugiere que se tiende a reforzar sistemas tayloristas (2000: 23-24). Por el otro lado, son ampliamente conocidos y registrados -aunque poco sistematizados- los casos de subcontratación e informalización de la producción en este grupo.

El cuadro que emerge es diametralmente contrario a la noción de la evolución productiva flexibilizadora en sus versiones “virtuosas”¹⁴. Al contrario, se ha constatado que la flexibilización funcional, numérica y salarial entre “los 100” ha producido en varios casos una especie de involución industrial. La externalización del “sector informal” significa en muchos casos una des-tecnificación del proceso productivo, la ampliación de formas despóticas de manejo empresarial, y un empeoramiento de las condiciones laborales, estrechamente ligado a la feminización de la fuerza de trabajo. Aun donde hay mejoras en la productividad, parecen estar divorciadas de las condiciones de empleo y de la remuneración. Un estudio reciente de la OIT proporciona datos sugerentes: no obstante un aumento de la productividad significativa en la industria manufacturera entre 1990 y 1996, los salarios reales en el mismo sector *cayeron* en 14% (Martínez de Bujo, 1998: 26, 96).

En resumen, las estrategias predominantes entre “los 100” tienden hacia la explotación de “ventajas espurias” o lo que algunos llaman el “camino bajo” (Harrison, 1997: cap. 6). Estas estrategias articulan este grupo de manera cada vez mas estrecha e íntegra al sector informal. En resumen, es aquí donde más se ven las tendencias de precarización y exclusión (de los derechos laborales y ciudadanos) en la inclusión (a los procesos productivos). Aun más que en el grupo de “los 10” - donde persiste un núcleo de trabajadores “privilegiados”- es aquí entre “los 100” donde la “flexibilización primitiva” (de la Garza Toledo, 1992) se manifiesta.

“Los 500.000”

Por último, Grebe alude a “...algo más de 500.000 microempresas que operan en la agricultura, el comercio y la artesanía, en condiciones de muy baja pro-

ductividad y limitadas capacidades de constituirse en las fuerzas motrices del cambio económico”. En cuanto al número de trabajadores, éste es el sector más importante de la economía y del aparato productivo. Se estima que 8 de cada 10 trabajos nuevos en la última década han sido creados acá (CEDLA, 1999); un tanto más de los 7 de cada 10 que se estima para la región (Weller, 2000).

Los estudios de la industria en el sector informal resaltan la volatilidad e imprevisibilidad de los mercados servidos, y las estrategias necesariamente ágiles para sobrevivir en estas circunstancias. En particular, los estudios enfatizan estrategias basadas en ciclos bruscos de absorción y expulsión de mano de obra, lo cual permite ajustarse a los altibajos del mercado, mientras hace poco probable las innovaciones tecnológicas o de procesos que permitirían mayores niveles de productividad. El sector es tremendamente dinámico y heterogéneo, y las categorías para describirlo son más paraderos en procesos rápidos de ajuste que características duraderas de las unidades. En este sentido, estudios de campo han hecho ver que en períodos cortos los trabajadores de una unidad productiva pueden transitar rápidamente entre las categorías “familiar”, “semi-empresarial” y “empresarial”, para luego volverse proletarios invisibles cuando la familia-base de la empresa ve necesario migrar, por ejemplo, a Buenos Aires (Kruse, 2000).

En cuanto a la relación entre el sector informal y el mercado de trabajo, se ha detectado anecdóticamente algunas tendencias. En períodos de crecimiento estable, los salarios en el sector informal pueden ser iguales o mejores que en el sector formal. No debe sorprender que en estas circunstancias, y ante la enorme dificultad de encontrar empleo fijo, muchos aspiran a “independizarse” -es decir, a establecerse en alguna actividad en el sector informal y a la autonomía que esto concede. En tiempos recesivos, sin embargo, se ha visto que muchos buscan volver a integrar al mercado de trabajo por la estabilidad de ingreso que representa, aunque sea en condiciones inferiores¹⁵.

Por otro lado, este sector juega un rol importante en la economía en su conjunto, aunque todavía difícil de cuantificar. Como hace años señalaba Portes, lejos de ser un residuo de una premodernidad que tendería a desaparecer con la industrialización, lo “informal” se ha establecido como el ámbito principal de la economía nacional (Portes, 1995). Lo “marginal” se ha vuelto “central” y muy imbricado en la economía formal, ahora “marginal” en cuanto a su capacidad de generar empleo. Estos lazos son múltiples. Como explica García Linera,

“... hoy la banca, la industria, el gran comercio, la gran minería privada, la agroindustria de exportación, cada uno a su modo ha refuncionalizado el uso de sistemas laborales, asociativos y culturales de la economía campesina, artesanal, doméstico-familiar para la obtención de materia prima (leche, lana, soya, trigo, arroz, minerales, coca); para la elaboración de partes de componentes del producto total (joyas en oro, zapatos, textiles, pasta base); para el abastecimiento de fuerza de trabajo temporal y la tendencia a

la baja del salario urbano (petróleo, industria); o para la obtención de tasas de interés superiores al promedio ([banca de microcrédito])...” (2001)¹⁶.

Sobre las condiciones laborales, la información es contradictoria. En cuanto a horarios y salarios, las unidades del sector informal pueden ser a veces mejor, otras veces peor que el empleo formal. Como señalámos arriba (como hipótesis más que como afirmación), lo que parece incentivar las entradas y salidas es más la relativa importancia de ingresos estables que el nivel de remuneración misma. Dada la correlación de fuerzas sumamente adversa para los trabajadores al nivel de piso de fábrica, y la inoperancia de muchos sindicatos en la defensa cotidiana de los derechos laborales, no se puede tomar por sentado que las condiciones laborales son necesariamente peores en el sector informal, y es claro que el despotismo y paternalismo reinan en ambos.

En cambio, una cosa sí marca una diferencia importante: en el grupo de “los 100” quedan sindicatos y referentes sindicales activos; en cambio en el sector urbano de los “500.000” el sindicalismo se va perdiendo como referente, y la noción de que el mundo del trabajo podría ser un ámbito de derechos (sujeto a regulación y fiscalización *pública*) y base de la participación social, se vuelve casi inconcebible. En un estudio de caso en México, Saraví describió un fenómeno homólogo:

“...El incumplimiento de la legislación, ni siquiera parece ser considerado como una situación que coloca al productor en infracción, sino que la infracción parece radicar en el trabajador que exige su cumplimiento. (...) Con frecuencia, los mismos trabajadores tienden a interiorizar esta misma percepción, lo cual hace que mientras en muchos de ellos directamente se desconoce cuáles son sus derechos, en otros desaparece la concepción de “derechos” que corresponden al trabajador, cuyas consecuencias pueden ser más perjudiciales que el simple desconocimiento (1997: 19, n. 7).

El mercado de trabajo y la condiciones laborales

Como en América Latina en general (Klein and Tokman, 2000: 18), la disminución en el empleo público no ha sido contrarrestada por la generación del empleo por la empresa privada. Entre 1985 y 1995 cayó el empleo público del 24% al 13% de la PEA, mientras el empleo en las empresas privadas formales sólo subió del 16% al 19%.

Cuadro 1
Empleo por segmento del mercado laboral

Año	Empleo público	Empleo privado empresarial	Empleo privado informal
1985	24%	16%	60%
1995	13%	19%	68%

Fuente: Arze Vargas and Maita Pérez, 1999; Arze Vargas, 2000: 28.

Como señala Arze en su resumen del mercado de trabajo, más de 15 años de ajuste no han modificado significativamente el perfil del mismo. Lo que sí ha cambiado son las condiciones de trabajo. Los detalles han sido amplia y sistemáticamente presentados en otros lugares (Arze Vargas, 2000; Arze Vargas, Dorado, Eguino y Escobar de Pabón, 1993; Arze Vargas y Maita Pérez, 1999; CEDLA e ILDIS, 1997). En resumidas cuentas indicaremos que, desde el ajuste, los bolivianos trabajan más horas (con la excepción del sector estatal), bajo condiciones más precarias (entre 1989 y 1999 los contratos “eventuales” han subido de 20% a casi 40% del total de los ocupados, según Arze Vargas, 2000: 47), con reducidas posibilidades de acceder al seguro social y beneficios complementarios, y en ámbitos donde la posibilidad de invocar derechos laborales se achica. Y esta fuerza de trabajo es cada vez más joven y femenina, y tiene cada vez mayores niveles de instrucción (Arze Vargas, 2000: 41).

En los últimos años el desempleo abierto en Bolivia ha estado muy bajo, rara vez pasando del 5%. Pero detrás de esta cifra se esconde una subempleo dramático. Acorde a estimaciones de CEDLA, si se cuantifica y convierte aquellos trabajos insuficientes para satisfacer necesidades básicas en menos puestos de trabajo, pero adecuados para sí satisfacer aquellas necesidades básicas, se llega a un nivel de “desempleo equivalente” que varía entre 28% y 35% en la primera década post-ajuste, con un promedio de 31,9%¹⁷.

Es imprescindible subrayar la crisis social en medio de la cual se dan estos procesos. Hay ya datos abundantes sobre las tendencias regionales: formas de inversión y crecimiento que reducen la utilización de mano de obra, creciente desempleo, y procesos de desintegración y recomposición de los procesos productivos que tienden a exacerbar varias polarizaciones (entre calificados y no, entre instruidos y no, entre formales y no, etc.). El resultado a nivel regional: un aumento alarmante de precariedad, vulnerabilidad y exclusión social (Klein and Tokman, 2000; Weller, 2000; Pérez Sáinz, 2000). En este contexto, Bolivia parece ser un caso dentro de la tendencia general, aunque algo extremo. Como subraya Escobar sobre el caso boliviano, la precarización se “ha instalado” e inclusive ha llegado a un límite, produciendo ahora un aumento en el desempleo abierto. El efecto más pernicioso que señala es la invisibilización y la exclusión:

una especie de des-ciudadanización que parte de los cambios en el mundo del trabajo (Escobar de Pabón, 2001).

Sindicalismos fabriles post-ajuste

Lo cuantitativo

La tasa de sindicalización -medida como afiliados como porcentaje de los asalariados- no ha variado sustantivamente entre 1989 y 1999: de 25,7% y 25,1%, respectivamente. Lo que sí ha variado es la composición de los afiliados: el porcentaje de jóvenes afiliados se ha duplicado (reflejando tal vez más una inserción muy joven que más sindicalización) y el porcentaje de adultos jóvenes (de entre 20 y 34 años) ha caído de 21,6% a 18,5%, quienes, su supone, son lo que más estarían sufriendo los efectos de las estrategias basadas en “ventajas espurias” (Arze Vargas, 2000: 46).

Cuadro 2

Afiliación por categoría ocupacional y rama de actividad (porcentajes)¹⁸

	1989	1999
Obreros ¹⁹	17,5	10,95
Empleados ²⁰	28,0	30,4
Manufactura	15,5	13,8
Construcción	10,6	6,6
Transporte y Com.	35,4	31,9
Comercio	7,5	4,6
Servicios ²¹	34,1	43,4
Otros ²²	24,8	22,1

Según datos de Arze, en 1987 -es decir, poco después del ajuste y varios años antes de las privatizaciones- la COB estaba conformada por 37 organizaciones de nivel nacional, 18 confederaciones y 19 federaciones. De ellas, 18 estaban conformadas principalmente por trabajadores dependientes de empresas e instituciones estatales, 10 por trabajadores dependientes de empresas privadas, y 9 por otros sectores varios (campesinos, gremiales, artesanos, estudiantes, cooperativistas, artistas, comerciantes). Hoy, en cambio, el mismo autor afirma que, producto de la relocalización, las privatizaciones y los procesos de transformación, por lo menos 5 de las 18 organizaciones conformadas por trabajadores dependientes del estado han sufrido “cambios radicales”, y otras tres “...prácticamente han desaparecido...” (Arze Vargas, 2000: 42-43).

Varios factores -algunos señalados arriba- se juntan para producir una efectiva des-sindicalización²³. En primer lugar, están las estrategias empresariales. Por varios medios inducen directamente a la des-sindicalización como forma de abaratar costos de mano de obra; entre otros están la subcontratación, el desmembramiento de la empresa en unidades inferiores a 20 trabajadores (el mínimo necesario para organizar legalmente un sindicato), y campañas cotidianas de intimidación y amenazas contra dirigentes sindicales. Estas últimas resultan eficaces con una fuerza de trabajo cada vez más femenina y joven, de escasa experiencia sindical y poco conocimiento de sus derechos. En otros sectores relativamente nuevos (ciertos sectores de servicios, floricultura, etc.), está sobreentendido al arrancar que el sindicalismo está proscrito -proscripción que es libre y rápidamente aplicada.

En resumen, operan múltiples dinámicas en Bolivia que militan en contra del sindicalismo: en las empresas capitalizadas se da una fragmentación y jerarquización de la fuerza de trabajo, dejando un núcleo privilegiado cada vez más reducido y posiblemente contribuyendo más al desempleo que al empleo. Entre las “100” industrias nacionales, las formas de enfrentar la apertura comercial tienden a ser en base al abaratamiento de la mano de obra, produciendo precarizaciones e informalizaciones varias. Se da al mismo tiempo un crecimiento relativo y absoluto de aquella masa de trabajadores del sector informal, articulados de varias maneras al sector informal, quienes ejercen una presión negativa constante sobre los salarios, asegurando de este modo que los “ajustes privados” (González de la Rocha, 1999) seguirán subsidiando las ganancias empresariales. Al mismo tiempo, emerge una fuerza de trabajo cada vez más femenina, joven, “acostumbrada” a la inestabilidad, y con precarias o inexistentes experiencias y referentes del sindicalismo.

Lo cualitativo

Para el sindicalismo las transformaciones cuantitativas son significativas. Empero, tal vez tanto o más importantes aún son los cambios cualitativos. Estudios de piso de fábrica y la experiencia de los dirigentes sindicales (ver abajo) indican que detrás de cifras de precarización, des-sindicalización y vulnerabilidad social general se esconde una inoperancia de los sindicatos existentes y dificultades enormes para conformar nuevos sindicatos. Hoy el trabajo se desenvuelve en un medio cotidiano terriblemente adverso a la concepción, la articulación y la defensa de un interés colectivo.

No es una exageración hablar de sistemas de relaciones industriales basados en el miedo, inclusive en empresas relativamente “modernas”. Como han sugerido varios autores, para que funcionen los regímenes fabriles se requiere -aun en los sistemas más minuciosamente estandarizados- una colaboración activa y creativa por parte de los trabajadores. Apunta un autor: “...procesos productivos de-

penden de una gama de prácticas informales e improvisaciones que nunca pueden ser codificadas...” (Scott, 1998: 6). El proceso productivo descansa, entonces, sobre balances tenues sostenidos, ajustados y renegociados cotidianamente entre trabajadores y gerentes. En la medida en que se va “informalizando” el aparato productivo, nuestra experiencia sugiere que las relaciones industriales descansan cada vez más sobre despotismos y paternalismos, una tendencia identificada por otros analistas en otros contextos (Lautier, 1999; Harvey, 1989; Yelvington, 1995; Benenati, 1998; Hsiung, 1996). En estas circunstancias, muchas veces las muy celebradas “formas de resistencia cotidiana” al régimen productivo paradójicamente pueden ser o neutros o un factor que directamente debilita la emergencia, consolidación y defensa de un actor colectivo en el mundo del trabajo²⁴.

Cuando hacemos referencia a los aspectos cualitativos del sindicalismo, nos referimos en primera instancia a estos ámbitos: la capacidad de negociar balances tenues entre capital y trabajo en fábricas, y lograr resultados en lo cotidiano. Operando en un terreno despótico y/o paternalista, y con -como dicen los dirigentes citados abajo- “10 u 11 en la puerta” para cada trabajador empleado, no debe sorprender que el sindicalismo cualitativamente esté en pleno repliegue, con actitudes defensivas, y con visión inmedatista. Cuando mucho, están defendiendo lo que tienen o negociando cómo frenar la erosión de ello.

En el sector informal sugerimos que cualitativamente la situación es más dramática: el referente, concepto mismo de “derechos” o una voz o cuerpo colectivo en el trabajo, está por lo general ausente. La forma más común de “registrar” una queja es marcharse, fenómeno que produce trayectorias laborales sumamente fragmentadas, lo que un autor ha llamado la emergencia del “trabajador nómada” (García Linera, 1999)²⁵.

Debates sobre el sindicalismo

Al mismo tiempo, y a otro nivel, la COB está en plena crisis. Como afirma Calla, “...tratar sobre los sindicalismos en Bolivia ya no es (...) sinónimo de referirse a la COB. (...) Los sindicalismos bolivianos ya no cuentan más, sino formalmente, con una matriz ordenadora y centralizadora para su accionar, lo que causa (...) dinámicas centrífugas y desencuentros entre sus distintos sindicatos sectoriales y regionales...” (2000: 218). Las disputas tienen que ver con problemas orgánicos reales (por ejemplo, ¿cual será el rol de los sectores campesinos en la dirección?) y también con la manera en que la COB se ha convertido, por un lado, en un escenario de politiquería periódica de los partidos y, por otro, en una competencia triste por los residuos de un corporativismo pasado. Con frecuencia las dirigencias nacionales se prestan a estos juegos políticos y a sujetarse “...a sus antiguas fidelidades con el estado y a los márgenes que éste puede concederles...” para prolongar sus carreras individuales (Arze Vargas, 2000: 79).

Arze ha resumido el debate actual al respecto en tres campos, cada uno con su propio análisis de los orígenes de la crisis y sugerencias en cuanto a qué hacer. El cuadro a continuación -basado en Arze (2000: 54-66) y con elaboraciones mías- resume los campos: los "modernizadores", quienes postulan la necesidad de sindicatos coadyuvantes de la reconversión productiva; las izquierdas tradicionales, que argumentan continuidad en el capitalismo y la centralidad obrera y su vanguardia partidaria; y lo que Arze llama los "críticos", quienes, sin abandonar el marxismo, postulan cambios sustanciales en el capitalismo, los procesos de subjetivación y, por tanto, en las formas de organización, necesariamente ahora "autogestionarias".

Cuadro 3
*Debates sobre la COB y el sindicalismo en Bolivia*²⁶

	Grupo 1: enfoque de los "modernizadores"	Grupo 2: enfoque de las "izquierdas tradicionales"	Grupo 3: enfoques "críticos"
Cambios materiales en sistema económico	Se ha dado un cambio cualitativo en la economía global, que invalida conceptos y categorías anteriores del capitalismo (creación de valor, capital, trabajo, empresa, etc.)	En su esencia, el capitalismo no ha cambiado, sino que se ha profundizado la explotación. Relativa ausencia de labor analítica en relación a los cambios.	Ciertos conceptos marxistas siguen siendo válidos, pero se ha cambiado y complejizado dramáticamente el capitalismo, creando un escenario dramáticamente distinto.
Orígenes de crisis de la COB	Con la desaparición inevitable o natural del estado desarrollista, dejó de tener sentido su contraparte corporativo-social. La COB fue incapaz de entender estos cambios, y queda anclada en su pasado. La COB se volvió "... estática, sin horizonte para reaccionar y desenvolverse con solvencia bajo las reglas de juego democrático. Los estereotipos que maneja la COB con referencia a la democracia 'burguesa' la colocan casi siempre fuera de contexto, sin capacidad de propuestas..." (Camargo Chávez, 2000: 11).	La orientación política ha sido determinante de su éxito o fracaso en la movilización para conquistas y creación de un órgano de poder. Las dirigencias de la COB se dejaron desviar a propuestas reformistas, y a la trampa del corporativismo (co-gobierno), que condujo a una burocratización y estatización del ente sindical. Los reflujos del sindicalismo revolucionario son sobre todo producto de traiciones de los líderes, y el abandono de principios.	La forma que tomó la COB en cuanto a instrumento de poder era a la vez su "grandeza y su tragedia". El corporativismo peculiar que le permitió una fuerza extraordinaria terminaría debilitando la "sociedad" y destruyéndola a la misma COB. Al imbricarse con "...las jerarquías estatales que usurpan decisiones que competen a la sociedad...", se corrompe -es decir, en lugar de inyectar poder social al estado, se inyecta estado al ente sindical, "...mediante la cooptación de dirigentes sindicales..." (García Linera, 1999: 52).

Cuadro 3 (continuación)

	Grupo 1: enfoque de los "modernizadores"	Grupo 2: enfoque de las "izquierdas tradicionales"	Grupo 3: enfoques "críticos"
Estrategia de salida de la crisis	Como la "globalización" es determinante y no puede ser resistida, los sindicatos deben volverse "corresponsales" con los empresarios del aprovechamiento oportuno de las posibilidades de mercado. Esto implica espíritu de colaboración, flexibilidad e individualización de los costos de empleabilidad.	Los objetivos fundacionales del sindicalismo revolucionario siguen en pie, basados en la centralidad obrera. Falta reconstituir liderazgos forjados en momentos de tensión social, y atención a rebeliones obreras como expresiones incipientes de construcción de un instrumento de poder obrero.	Rechaza todo tipo de vanguardismo, y ve en las rebeliones recientes formas emergentes de subjetivación y organización. Postula la necesidad de apoyar a la "auto-organización" de los trabajadores. Sin descartar el sindicato en sí, rechaza enfáticamente el sindicato en su versión corporativista.
Adherentes y voceros	Ministerios del Estado, empresarios privados, algunos think tanks, proyectos con financiamiento del BID, analistas y consultores.	Dirigentes de algunos sectores, a veces sólo discursivamente, residuos de los partidos trotskistas.	Pocos intelectuales y docentes universitarios, con cierta resonancia entre organizaciones de reciente emergencia.
Textos claves	Camargo Chávez (2000), Lazarte Rojas (2000); Toranzo Roca y Arrieta (1989).	Tesis de Pulacayo, varios números del periódico Masas.	García Linera (1999, 2000).

Estrategias sindicales hoy

La crisis en las cúpulas de la COB han desarticulado las Centrales Obreras Departamentales (CODes) de la entidad matriz (COB) y, en la práctica, han dejado a las federaciones sectoriales y sindicatos actuar por su propia cuenta. Al mismo tiempo, ha surgido un discurso de "volver a las bases", e iniciar un proceso de reconstrucción desde abajo²⁷. Aunque significa la pérdida de un ente aglutinador social y político a escala nacional, por otro lado este "abandono" ha exigido de los sindicatos y sus federaciones un aterrizaje en las nuevas realidades del mundo del trabajo (French y James, 1997).

Las estrategias emergentes son varias -aunque el término "estrategia" puede ser un tanto generoso. Más que una estrategia lo que emerge parece ser -con algunas excepciones- un conjunto de movidas defensivas improvisadas, más los tramites y ligas deportivas de siempre. Hay muchísima claridad, pero faltan las habilidades y capacidades para convertir esta lucidez en acción programática. Para indicar algunas "estrategias" emergentes, presentamos extractos indicativos de entrevistas a dirigentes fabriles en su último Congreso en septiembre de 2000 en Oruro.

Santa Cruz: "Muy pocos somos los dirigentes que pensamos de esa forma"

Ediberto²⁸ es joven, de las provincias, no de la ciudad. Desde su ingreso al mercado laboral hace 11 años ha trabajado en varias cosas: ayudante de transportista, albañil, radialista y, al final, fabril en una fábrica de plásticos. Su aspiración a participar en la vida pública lo ha llevado a la dirigencia sindical. Representa - a juicio del autor- una tendencia nueva, más pragmática en el sindicalismo boliviano, nacido no de los postulados de los "modernizadores" (ver arriba), sino de las batallas cotidianas de la Federación de Fabriles.

En Santa Cruz las élites locales han construido una identidad regional fuerte en contraposición a lo andino altiplánico y valluno (léase en oposición a *lo indio*), proyecto compartido en cierto grado por las clases subalternas. El desarrollo regional despegó con el *debt-led development* bajo la dictadura de Banzer (1971-78), y hoy el epicentro de la economía boliviana marcha inexorablemente hacia el oriente, cuya capital es Santa Cruz. En 1952 Santa Cruz era una cabecera provincial; hoy día es la ciudad más moderna de Bolivia, con más de un millón de personas.

La sede de la Federación de Fabriles de Santa Cruz es un edificio antiguo del estilo colonial: oficinas en tres pisos alrededor de un patio interior, con algunas piezas alquiladas o prestadas. La descomposición del patrimonio, adquirido en los momentos más prósperos del corporativismo, es palpable. Hace unos años atrás la federación contaba con 43 sindicatos; hoy cuenta con 33, y hay unos cinco en proceso de conformarse. El sindicato más grande es de unos 400 trabajadores, y en los más pequeños, el mínimo establecido por ley, es decir, 20. Se estima que aglutina entre 5 mil y 8 mil trabajadores (no hay un censo fabril), de un total estimado por el mismo dirigente en unos 200.000 trabajadores en la región.

La desaparición de los 10 sindicatos, explica Ediberto, se debe a la quiebra de algunas empresas y a campañas empresariales de des-sindicalización, vía el desconocimiento de la personería jurídica del sindicato, el despido de los dirigentes, y el desgaste burocrático. Relata un caso típico:

"...Bueno, el resultado de este conflicto fue que después de 8 meses los dirigentes lamentablemente tuvieron que transar [con la gerencia] (...) por la razón de que [un dirigente] no goza de sueldo dirigente estando [en conflicto]. Y bueno la empresa los propuso: les voy a pagar hasta hoy día pero ustedes tienen que presentar su resistimiento al proceso: (...) renuncian al sindicato, renuncian a su fuente de trabajo, o sea, quedan los trabajadores afiliados totalmente abandonados..."

Las estrategias anti-sindicales, insiste, no son aisladas:

"...Lo que pasa actualmente es que la empresa privada ha ido fortificando su organización como federación, como confederación, como cámara, y es-

to hace de que ellos se reúnen ahora, antes no lo hacían de esta forma pero ahora se reúnen netamente para ver cómo tratar, digamos, de contrarrestar que los trabajadores no se organicen...”.

También enfrentan cotidianamente amenazas y hostigamientos “menores”. Al preguntar “¿Qué hacen los empresarios?”, ilustró:

“... Acusarlos, acusarlos de robo, acusarlos de sabotaje, amedrentarlos [*¿En qué sentido?*] Psicológico. [*Dame un ejemplo.*] [Asumiendo la voz del empresario:] ‘Mira, si tú te metes en esto yo te puedo hacer esto, te puedo denunciar a la policía, te puedo acusar de robo y te puedo inventar un montón de testigos, yo pago [a los testigos] yo tengo plata’...”.

Pero a diferencia de otros dirigentes, atribuye estas prácticas no al empresario como tal, sino al carácter retrógrado de algunos de ellos.

“...Esa es la forma de algunos malos empresarios, esos que ni siquiera han cursado la secundaria, de esa gente [que] ignora todavía que es lo que hay detrás de la empresa, los derechos de los trabajadores, la relación humana entre obrero y patrón. Ellos lo toman de otra forma, se creen dictadores dentro de su fuente de trabajo, dentro de su empresa con la gente ¿no? creyendo que son unos vasallos, pero lamentablemente es así...”.

Al atribuir la erosión de los derechos laborales al ajuste estructural, indica que los empresarios (nacionales) también han perdido con la medida:

“...Desde 1985 con el 21.060 que nació el 29 de agosto ya son 15 años; ellos [los empresarios] en aquel tiempo aplaudieron ese decreto pero hoy en día ellos lloran porque sufren las consecuencias, porque las empresas lamentablemente se están yendo a la quiebra, nuestros empresarios no se han preparado para este cambio...”.

Este pragmatismo se refleja en las prácticas cotidianas. Lograr defender los derechos de los afiliados, y avanzar en lo posible para mejorar sus condiciones, requiere de un fin de acercamientos, improvisaciones, y trámites día a día: pronunciarse, con los empresarios, en contra de nuevos impuestos; apelar a la conciencia de unos empresarios para frenar los abusos de otros más despóticos; etc. En esta “economía” local, sugiero que el discurso retórico queda relegado no por un giro político, sino por su relativa inutilidad en relación con el trabajo práctico; el pragmatismo nace no tanto de una estrategia preconcebida o de una desviación ideológica, sino de la necesidad de actuar desde una posición sumamente débil y desamparada. El dirigente explicita este desamparo, al referirse a la crisis de la COB:

“...Sinceramente yo te diré lo siguiente, la Central Obrera Boliviana para todos los trabajadores, para todo el proletariado (...) es un ejemplo de cómo se ha sabido conducir de una manera muy acertada, digamos. Lograban

conseguir beneficios sociales que iban en favor de todos los trabajadores; pero hoy en día la Central Obrera Boliviana no consigue absolutamente nada para los proletarios, ni siquiera un parámetro para poder de ahí partir y negociar un pliego petitorio. No lo hace, ¿por qué? Porque no tienen la capacidad los dirigentes o no piensan como obreros...”.

“...No diremos [que los dirigentes son] corruptos sino que son incapaces, esa es la palabra, porque ellos van allá obedeciendo a ciertos apetitos personales, o yendo a cumplir con una misión que va delegada de algún color político, como lo hemos podido ver durante todo el período anterior. Entonces por esa razón es que nuestra Central Obrera Boliviana lamentablemente está en crisis: porque los dirigentes que asumen tal responsabilidad no tienen la capacidad suficiente para poder conducir. (...) Los empresarios saben, los empresarios saben pues que la Central Obrera ya no suena ni trueno, así que hablarles o mencionar a la Central Obrera Boliviana es para que ellos más bien se rían, lo tomen a chiste, no sé...”.

Aunque se habrá vuelto más local el accionar sindical, un legado de épocas anteriores queda: el de pensar en términos más amplios, de cambio social a escala nacional. Y en esta propuesta de cambio hay una ruptura clara con el concepto de instrumento directo del poder obrero y con las “formas tradicionales”, entendidas como enfrenamientos y tomas de posiciones de fuerza. Dice:

“...Muy pocos somos los dirigentes que pensamos de esa forma; si pensáramos unos 100 dirigentes así como pienso yo y como piensa [otro dirigente], te digo que en Bolivia el sindicalismo no sería la dictadura proletaria, sino el sindicalismo sería el instrumento fundamental para conducir a la sociedad, para dar, para proponer que es lo que deben hacer nuestros representantes nacionales, diputados, senadores y hasta el mismo presidente ¿no? Pero, lamentablemente, bueno, nosotros los sindicalistas muchos pensamos de una forma tradicional -que aquí es con palo, que aquí es con piedra, que aquí es gritando fuerte, que aquí es con huelga...”.

Oruro: “vamos a ser esclavos”

Nos reunimos con dos dirigentes de la Federación de Fabriles, que aglutina a unos 2.000 trabajadores en 21 sindicatos, principalmente de industrias livianas. Hay una empresa “grande”, de alimentos, con unos 700 trabajadores, y muchos pequeños con entre 30 y 70. Ambos dirigentes son hombres, sobre sus 40 años, e hijos de mineros. Oruro, ciudad del altiplano a más de 4.000 metros sobre el mar, era en otra época uno de los centros mineros más importantes del país y, posiblemente, del continente. Hoy, la grandeza de algunos de sus edificios contrasta con la actividad letárgica del centro de la ciudad. Del ajuste, relocalización y desindustrialización, nunca se ha recuperado. La sede de la Federación ocupa el segun-

do piso de un enorme y antiguo edificio en pleno proceso de descomposición. Compartiendo el edificio están un puño de abogados de pueblo y pulperías.

A diferencia del dirigente cruceño, los dirigentes de Oruro han trabajado por períodos largos en dos o tres industrias -trayectorias fabriles comunes de su cohorte. Al hablar, el tono es sombrío, la clave retórica de tragedia o desdicha, como la ciudad y región misma que ha conocido grandes rupturas y traumas en los últimos años, engrosando las filas del comercio minorista:

“...Ahora incluso tenemos aquí en Oruro más comerciantes que compradores, más vendedores, todos tienen que buscarse la forma de poder ganarse un peso por lo menos para llevar a sus hogares...”.

Sobre las condiciones generales, señalan la disposición de ganar salarios miserables con tal que sea una miseria estable:

“...Hay trabajadores honestamente que no ganan básico nacional²⁹, no ganan ¿por qué? Porque quieren tener algo [algún trabajo estable] en las fábricas...”.

El ajuste -“el 21.060”- figura grande en su explicación de su situación: lo articula directamente al cambio de balance, poder en las fábricas, empeoramiento de condiciones, y al miedo permanente de perder el trabajo:

“...Yo creo que [con] el 21.060 los empresarios se han dado formas de poder evitar la carga social por parte a los trabajadores. Para ello se han valido de muchos argumentos y contratos fijos, contratos semestrales, trimestrales, anuales; todo con el propósito de no pagar los beneficios que por ley les tendría que corresponder si es que pasa alguna cosa. Dentro ese aspecto yo creo que muchas empresas, como bien decimos hace rato, están actuando por ese lado y no denuncian ese tipo de anomalías porque si denuncian van a perder la fuente de trabajo...”.

“...Bueno, el empleador dice: ‘Este [sindicalista] es demasiado molesto y hace sufrir, bueno, sáquese’. Y el 21.060 les faculta, en dos días están fuera. ¿Qué va a hacer el trabajador? Y ahí es una palabra que todos emplean: ‘se va uno y están en la puerta 10, 11’, con la mitad incluso del salario que pueden percibir, y hay así...”.

Resaltan continuamente la dificultad de cultivar nuevos dirigentes, por el miedo de perder el trabajo:

“...Anivel sindical siempre incluso los mismos trabajadores somos así [con miedo]. Si salimos a una Federación, o si nos metemos a un sindicato, como quien dice, estamos sacando un pie ya afuera de la empresa; es así más claro y concreto. Teníamos [como dirigentes de la Federación] nuestra gestión de dos años aquí o en la Confederación, y en la puerta ha aparecido un

memorándum de retiro ya, entonces es un riesgo. Por eso es que a veces carecemos incluso de cuadros sindicales porque el trabajador no quiere asumir esa responsabilidad porque sabe que va a perder su fuente de trabajo...”.

Agrega el otro dirigente:

“...Efectivamente, como decía el compañero, existen tal vez compañeros más capaces, que tengan más conocimiento sobre el campo sindical, pero lamentablemente la presión es enorme...”.

El cuadro que presentan es dramático: empobrecimiento, precarización y des-sindicalización. Comentó uno de los dirigentes, “...si se da cuenta sí vamos a perder todo. Yo pienso de que ya no vamos a ser trabajadores, sino vamos a tener que pasar a ser como esclavos si vale ese término...”. En este contexto, emergen estrategias defensivas que buscan preservar puestos de trabajo, aunque sea sacrificando condiciones de trabajo y prestaciones sociales:

“...Muchos trabajadores por no perder su fuente de trabajo han tenido que en algunos casos ceder algunas conquistas que han tenido, algunos beneficios pero con el propósito de no perder su fuente de trabajo. Han tenido que dar su mano a torcer para seguir manteniéndose dentro del trabajo: eso ha sido tal vez uno de los puntos de la crisis que también ha debilitado en gran manera al movimiento sindical...”.

En la medida en que hay “estrategias”, giran en torno no a derechos laborales, sino al *derecho al trabajo mismo*. Ante las presiones -reales o percibidas- de los sindicatos, los empresarios amenazan con cerrar sus puertas. Por tanto, dentro de la visión de los dirigentes está la necesidad de impulsar la reactivación económica desde el sindicato:

“...Queremos la reactivación económica, (...) queremos capital fresco para empezar a producir más, porque si nos vamos a dejar así o vamos a quedarnos de manos cruzadas nosotros, los ejecutivos de las empresas van a tender a cerrarse de a poco. Y esto significa pues el desalojo de sus fuentes de trabajo, no sólo de los trabajadores sino del conjunto de sus familias, que las esposas, los hijos...”.

Relatan en términos positivos las ocasiones en las que se han movilizado para presionar al gobierno y a los bancos para ayudar a la empresa:

“...Entonces la materia prima la traemos de Chile, Perú, de la Argentina, también de Venezuela, entonces es muy caro. Por eso hemos pedido juntamente con el empresario, el empresario no quiere el cierre de la empresa, justamente es por eso que los dos -empresario y trabajadores- estamos empujando el mismo carro, pero lastimosamente el gobierno y la banca más que todo, la banca privada no nos quieren acceder...”.

“Nos damos cuenta ahora que -como diría- no hay pelea entre el trabajador y el empresario. El se ha dado cuenta de que gracias a su sindicato está su empresa; ha logrado tal vez recuperar su autorización [de importación] y entonces ha preferido tener su sindicato, lo ha reconocido...”

No obstante, saben que es un campo minado, y no una alianza simple. Recalcan que los mismos empresarios no respetan estos gestos y apoyos:

“...Mientras nosotros damos el brazo, el hombro por nuestras empresas por no perder la fuente de trabajo, por debajo nos dan bola, eso es un riesgo que se corre. Lo dije bien claro no se puede confiar, no hay confianza, hay que estar preparados para eso, así...”

En este contexto, la crisis de la COB es presentada como un factor que coloca al dirigente sindical en una posición humillante ante los gerentes, dificulta su trabajo, y en la que no tiene solución a la vista.

“...Yo le digo sinceramente, ya a veces hasta da vergüenza. Eso de los fracasos de la Central Obrera Boliviana han hecho también pues de que nosotros como dirigentes perdamos tal vez esa credibilidad no sólo de nuestras bases sino lamentablemente de nuestros jefes. (...) Lamentablemente ellos se ríen porque efectivamente ha sido como así. Esos dos congresos [fracasados de enero y mayo de 2000] que lamentablemente entre trabajadores no podemos resolver nuestros propios problemas...”

“...Para nosotros es un proceso -como le digo- si en este momento precisamente lo que estamos peleando son nuestras fuentes de trabajo, y encima que se nos vengán entidades matrices [de la COB] que nos representan a nivel nacional que no puedan darse solución, que no tengan una dirección bien constituida, eso va ser mucho. Yo creo que va a tener otro proceso para poder ya ganarse esa credibilidad de parte de nuestros empresarios. Como le digo no sólo la lucha ahora es ahora para el trabajador sino también la lucha es para nuestras fuentes de trabajo...”

Al preguntar sobre una visión estratégica o proyección social del movimiento sindical, se hizo mención a la necesidad de lograr articulaciones a nivel regional (“... Ahora estamos hablando con los fabriles a nivel regional ya; ya no a nivel de empresas porque si vamos a nivel de empresas solamente vamos a estar así: solos...”). Mencionan las movilizaciones sociales “nuevas” señaladas arriba, pero más como un fenómeno que los deja relegados, que como un aliado potencial. Concluyó un dirigente:

“...Se está saliendo a las marchas, pero lamentablemente cuando somos por eso empresas pequeñas no nos dan importancia, con este movimiento social, campesino, que es más ocupación para el gobierno...”

Cochabamba: “tenemos que perder el miedo”

Históricamente el granero de Bolivia, el *hinterland* de las minas, Cochabamba, es una ciudad de medio millón de habitantes, cuyo corazón económico sigue siendo el mercado de ferias campesinas (“la cancha”) y su proximidad a las áreas de cultivo de la hoja de coca. En los últimos años la ciudad ha absorbido docenas de miles de emigrantes del altiplano y de las minas. Hay varias industrias significativas, entre ellas una refinería de petróleo, una cervecera (ahora de capitales argentinos), una procesadora de soya (ahora de capitales peruanos) y una planta productora de calzado de Bata, de capitales canadienses, establecida en 1940.

Militantes de dicha planta han protagonizado el sindicalismo fabril boliviano por décadas; hoy el dirigente de la Federación de Fabriles de Cochabamba, Oscar Olivera, es trabajador de dicha empresa y, en los últimos meses, se ha vuelto conocido por su rol de portavoz en la lucha, mencionada arriba, que culminó en la desprivatización del agua de la ciudad, concedida por 40 años a un consorcio armado por la Bechtel de EE.UU., una de las mayores empresas de ingeniería civil del mundo. En tanto, Olivera se convirtió en uno de los primeros dirigentes laborales en jugar un rol central en los “nuevos” conflictos sociales, aunque paradójicamente un tanto al margen de la federación de sindicatos fabriles que dirige.

De las federaciones fabriles en Bolivia, la de Cochabamba se ha destacado en los últimos 5 años por tener un análisis franco de la crisis que está viviendo, y ciertas líneas de trabajo para enfrentarla. Entre estas líneas está una que busca estudiar para entender mejor el contexto actual, que a veces ha logrado articular las labores voluntarias de académicos y consultores³⁰; una línea para mantener una presencia sostenida en los medios locales de comunicación, que con el tiempo le ha ganado cierto prestigio como fuente fidedigna de información sobre el mundo del trabajo, sea fabril o no; una política de “puertas abiertas” a demandas y problemas de los sectores populares, que la ha convertido en paradero de todo tipo de reclamo popular que no encuentra donde ventilarse; y una línea de organización de nuevos sindicatos. En varios intentos -algunos con éxito, otros no- de organizar sindicatos aun donde la Ley General del Trabajo no lo permite (donde hay menos de 20 trabajadores entre permanentes y eventuales, etc.). Estas estrategias no siempre son bien vistas por los mismos dirigentes fabriles de la región, que ven en ellas un estorbo a prácticas sindicales ya rutinizadas.

La federación han organizado una “escuela sindical” con recursos propios, que busca formar nuevos sindicalistas y organizadores. En una reunión exploratoria, Olivera preguntó a las mujeres reunidas: ¿qué es lo que más necesitan para mejorar su situación en el trabajo? Una trabajadora joven articuló el sentimiento unánime del grupo cuando dijo “tenemos que perder el miedo, y aprender a hablar”. Comenta Olivera:

“...Ante esto vimos como urgente juntarnos, empezar a hablar entre nosotros, para romper el silencio y el miedo. Pero no es fácil. Primero, nadie tiene tiempo. Todos trabajan hasta 10, 12, 14 horas, incluso fines de semanas. Nos matamos para encontrar un horario en que nos pudiésemos ver...”.

En términos generales, los esfuerzos no han logrado revertir la fragmentación y des-sindicalización. Pero en su conjunto, estas actividades y la herencia de habilidades organizativas del movimiento laboral posicionaron a la Federación para poder articular varios grupos de manera potente cuando emergieron demandas sobre el destino del sistema local de agua. Relata el dirigente:

“...La Federación de Fabriles de Cochabamba es una organización sindical que durante los últimos 5 años ha estado realizando un amplio trabajo de reorganización del sector obrero, golpeado por la flexibilización de hecho impuesta en el país. Fue así entonces sobre el trabajo público desplegado que logramos cierto prestigio moral que nos respalde, y se logró constituir una organización -la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida- que permitió una convergencia de intereses entre pobladores rurales y urbanos en torno al problema del agua”.

En el conflicto por el agua, que logró movilizar docenas de miles de personas, Olivera subraya la relación tenue con el sindicalismo tradicional, del cual él mismo es dirigente:

“...Los trabajadores cochabambinos organizados hemos participado en cierta medida de manera institucional, brindando nuestros recursos y experiencia como Federación, a la Coordinadora del Agua. Pero salvo algunas cuantas fábricas que han tenido capacidad de participación organizada, más ha sido como individuos o grupos de trabajadores, como vecinos, miembros de comités de agua potable, pobladores, etcétera...”.

Las entidades de organización sindical de cúpula como, por ejemplo, la Central Obrera Departamental y otros sectores sindicalizados (maestros, trabajadores municipales, etc.) han tenido, en toda esta lucha, una participación reducida y poco significativa. Son más bien nuevos conglomerados humanos de trabajadores dispersos, organizados por barrio en sus cooperativas de agua, quienes se han movilizado con mayor contundencia. Esto hace pensar en la necesidad de consolidar estas nuevas experiencias organizativas que logran movilizar antiguas habilidades y recursos de un sector obrero actualmente golpeado y disgregado, y que al mismo tiempo se abren para incluir a nuevos sectores de la población que emprende, luchas en torno a la defensa de sus necesidades vitales.

Es más: Olivera plantea que tal vez son los trabajadores con empleo estable quienes menos participarán en las movilizaciones.

“...La amenaza de despido, los discursos sobre ‘competitividad’, las formas atípicas de contratación que tienen a los trabajadores siempre pendientes, muchas veces dificultan la movilización de la gente. Pero la corrupción, la privatización que nos quita hasta el agua crea condiciones para nuevos tipos de participación bajo nuevas formas. La Coordinadora es un ejemplo. Pensamos que su emergencia representa un nuevo temperamento social, pero ¿será sostenible? ¿Y su relación con los trabajadores organizados? Esto lo veremos...”.

Conclusiones

La “transición” de 1982, seguida por el “ajuste” en 1985, marcó el fin de una época, que se ha designado como la del “estado del ‘52”. Inició el fin sustantivo a un peculiar modelo corporativista, que puede ser entendido como una configuración de mediaciones entre el estado rector del desarrollo y participante directo en la economía; los actores de la economía regulada, aunque agudamente dependiente; y los actores de la sociedad y sus órganos corporativos, cuya organización en un inicio tuvo un impulso desde el estado, pero que con el tiempo conquistó un grado extraordinario de independencia en torno a la COB. Lejos de las teorías del corporativismo que ven en él un sistema multifacético de dominación esencialmente vertical (Schmitter, 1992: 80), en el caso boliviano estas intermediaciones pueden ser mejor concebidas como el conjunto de relaciones entre fuerzas inexorablemente opuestas, en cierto grado (pero decreciente) mutuamente imbricadas³¹, y atadas en un conflicto permanente³². Que esta configuración produjo una “continuidad de rupturas” -una historia marcada por su inestabilidad- no debe sorprender.

Con el “ajuste”, el estado dejaría su rol protagónico en la economía como productor y empleador; la economía se “liberalizaría”, y la COB, el órgano corporativo que en su momento ejerció un “poder dual” ante el estado, sufriría un debilitamiento crítico. Pero el “ajuste” se daría no sólo a nivel del estado, la economía, la sociedad y sus intermediaciones, sino también a nivel del significado, o de los procesos por medio de los cuales la gente aprende, vuelve entendible, y expresa el proceso social y su lugar propio en él. También hay “ajustes estructurales de significado”. Nos referimos a otro momento de esta índole arriba, con la “campesinización” de los “indios” por el estado, un elemento integral del régimen (inconcluso, por cierto) de constitución de la propiedad en tierra con la reforma agraria de 1953.

El “ajuste” de 1985 también conllevó un conjunto de reinscripciones de significado en torno al concepto y al rol del estado, los procesos políticos, y las formas de representación, organización y bases de protagonismo en y desde la sociedad y, por ende y en conjunto, una disolución de construcciones narrativas maestras (*master narratives*) vitales, instrumentos con los cuales, durante años, grupos enteros (diferentes y/o opuestos) lograron cierta cohesión social y hasta nacional en

el conflicto³³. Emblemática de este proceso es la “relocalización” de los mineros, el desmembramiento de las bases de aquella configuración potente en tanto mundo comunitario y de trabajo que se instaló en el centro del sindicalismo, y luego se irradió y caló con extraordinaria eficacia en muchos escenarios de la vida del país.

Pero tal vez más que una relocalización -lo cual sugiere el desplazamiento o trasplante íntegro de algo- lo que se ha vivido es una des-localización, es decir, una fragmentación y dispersión. Sobre el cierre de las minas un dirigente comentó: “...era como si alguien nos hubiera lanzado una bomba, y quedamos tirados por todas partes...”. Con este desmembramiento se “destapó la olla”: al erosionarse estructuras corporativas y narrativas maestras, surgen expresiones y demandas (culturales, étnicas, regionales) antes suprimidas por, subsumidas al, o relegadas por el sindicalismo clasista de la COB.

Luego del momento inicial de desmembramiento -territorial, económico, social y también de significado- surgen los procesos heterogeneizantes (“desmembradores”) de la reestructuración productiva. Lejos de producir coherencia y homogeneidad, hoy las transformaciones y operaciones cotidianas en el mundo del trabajo parecen producir, como delineamos arriba, una multiplicidad de posiciones y relaciones, en medio de una creciente polarización (diferencias más extremas), precarización (menos previsibilidad), y exclusión (des-ciudadanización, en la subordinación, pero vía articulaciones ambiguas). En este contexto, parece claro que si uno ha de conseguir un lugar en la sociedad que sea de “utilidad y reconocimiento social” (Castel, 1995), será muy probablemente *a pesar de*, no por medio de, el mundo del trabajo.

La improvisación en el sindicalismo urbano, y la perplejidad que la soslaya, reflejan esto. Ausentes las estructuras piramidales de la COB, se diluye el “modelo prescriptivo” sindical (minero), y se complejizan los conceptos y prácticas de los sindicatos y sus dirigentes. Tal vez los dirigentes y sus trayectorias siempre eran diversos, pero ahora -como detectamos en las entrevistas- ellos encuentran mayor espacio de expresión en las estrategias improvisadas. Ausentes de una narrativa maestra, hacen recurso de lo que “tienen a mano”, es decir, la historia, las identidades, y la configuración de fuerzas en los procesos locales. Hasta el temperamento público de los dirigentes parece ser menos consistente: si antes era algo reconocible, ahora se detectan diferencias en sus claves retóricas y disposiciones (tragedia [Oruro], optimismo calificado [Santa Cruz y Cochabamba]).

La complejización del sindicalismo se puede ver en la posición que toman ante la creciente informalidad y su misma falta de análisis. Si bien el sector informal siempre existía en Bolivia, antes operaba a la sombra de una poderosa narrativa modernista de la centralidad de la economía formal, y el sindicalismo fue capaz en cierto grado de articularlo a su proyecto mayor -la COB- aunque fuera en la subordinación³⁴. Hoy, en cambio, la informalidad o exclusión del empleo formal es la regla, no la excepción, y el ente articulador ha desaparecido. Por parte

de los dirigentes, se detecta cierta perplejidad ante el fenómeno y una variedad de actitudes y prácticas. Por un lado, los “10 u 11” en la puerta de la fábrica por cada puesto son vistos como una amenaza. Por el otro lado, en el caso de Cochabamba hay iniciativas incipientes de incorporar a los del sector informal al sindicalismo, aunque sea rebasando lo que la ley oficialmente permite. En cualquier caso, lo que caracteriza al sindicalismo estudiado son los procesos de improvisación y exploración local y regional.

Por último, se detecta un grado de divorcio entre los debates y las prácticas. Esto en parte se debe a lo que llamaré la “economía política de la producción analítica” en Bolivia. Hay un relativo olvido del sindicalismo por parte de una intelectualidad boliviana que antes “asesoraba” enérgicamente a la COB, y ahora se adhiere con entusiasmo a enfoques económicos que invisibilizan al mundo del trabajo³⁵, o teorías sociales que invisibilizan a lo económico³⁶. En cualquier caso, los dirigentes operan al margen de los tres campos de discusión presentados esquemáticamente arriba. El tenor y dirección del sindicalismo, propongo, se explican muy poco a partir de una adscripción ideológica a uno de los tres campos, y mucho más por la confluencia de trayectorias y aspiraciones personales, condiciones y circunstancias que se ponen en juego en un contexto dramáticamente desfavorable para el trabajo. Las dinámicas emergentes se caracterizan por una actividad enérgica de defensa y contención, pero poca reflexión estructurada y estratégica.

No obstante, como vimos arriba, la conflictividad señalada en la introducción involucra directamente a los dirigentes sindicales (caso Cochabamba) o plantea cuestionamientos profundos a su quehacer sindical. Es significativo que, aun debilitados, todos los sindicalistas siguen pensando más allá del sindicalismo, una herencia clara del carácter político de sindicalismos del pasado. Puede ser con un tono de nostalgia (Oruro), de añoranza (Santa Cruz), o de búsqueda en el terreno del conflicto actual (Cochabamba), pero siempre está presente.

En resumen, aunque hay rebotes de conflictividad y emergencia de nuevos actores, estamos todavía lejos de iniciar un proceso claro de recomposición sindical en el ámbito productivo urbano. Los cambios observados en los procesos productivos tienden a dificultar esta recomposición, introduciendo ambigüedades a la relación entre el mundo del trabajo y la acción colectiva y política. Con la disolución de la COB, las federaciones y sindicatos en la práctica desarrollan sus propias estrategias sindicales. Estas estrategias tienden a ser improvisadas, defensivas y reactivas, y tienden a divergir de las estrategias más políticas del pasado, aunque más por necesidad que por una opción política o ideológica. En algunos casos el entorno conflictivo y la ausencia de un discurso ordenador impuesto “desde arriba” conducen a búsquedas fructíferas, sobre una rica herencia que se vive como el imperativo de pensar lo social general desde lo particular sindical. Aunque se cuenta con materiales muy prometedores, hoy la recomposición sindical es más un desafío a futuro que un proceso en marcha.

Bibliografía

- Abramo, Laís 1999 “Desafíos actuales da sociologia do trabalho na América Latina: algumas hipóteses para a discussão”, en De la Garza, E. (comp.) *Los retos teóricos de los estudios del trabajo hacia el siglo XXI* (Buenos Aires: CLACSO).
- Arze Vargas, Carlos 1997 *Análisis subsectoriales: producción de chamarras de cuero y tela en las ciudades de La Paz y el Alto* (La Paz: CEDLA).
- Arze Vargas, Carlos 2000 *Crisis del sindicalismo boliviano: consideraciones sobre sus determinantes materiales y su ideología* (La Paz: CEDLA).
- Arze Vargas, Carlos y Félix Maita Pérez 1999 *Empleo y condiciones laborales en Bolivia* (La Paz: CEDLA).
- Arze Vargas, Carlos; Hugo Dorado; Huáscar Eguino y Silvia Escóbar de Pabón 1993 *Empleos y salarios: el círculo de la pobreza* (La Paz: CEDLA).
- Benenati, Elisabeth 1998 “Americanism and Paternalism: Managers and Workers in Twentieth-Century Italy.” En *International Labor and Working-Class History* N° 53: 5-26.
- Borneman, John 1992 *Belonging in the Two Berlins: Kin, State, Nation* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Calderón, Fernando y Carlos Toranzo Roca (comps.) 1996 *La seguridad humana en Bolivia: percepciones políticas, sociales y económicas de los bolivianos de hoy* (La Paz: PRONAGOB/PNUD/ILDIS).
- Calla, Ricardo 2000 “Los sindicalismos bolivianos contemporáneos: crisis y secundarización de un movimiento social desarticulado”, en Massal, J. y M. Bonilla (comps.) *Los movimientos sociales en las democracias andinas* (Quito: FLACSO Ecuador/IFEA).
- Camargo Chávez, Carlos A. 2000 *Del autismo a la resurrección: propuestas de reforma de la Central Obrera Boliviana* (La Paz: ILDIS-Labor).
- Castel, Robert 1995 *La metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado* (Barcelona: Paidós).
- CEDLA 1999 “Bolivia: 14 años de neoliberalismo”, en *Dossier Informativo No. 12* (La Paz: CEDLA).
- CEDLA e ILDIS 1996 *Informe social Bolivia 2: diez años de ajuste estructural* (La Paz: CEDLA/ILDIS).
- CEDLAE ILDIS 1997 *Informe social Bolivia 3: políticas de empleo* (La Paz: CEDLA/ILDIS).

De la Garza Toledo, Enrique 1992 “Prólogo”, en Covarrubias, A. (comp.) *La Flexibilidad Laboral en Sonora* (México D. F.: El Colegio de Sonora y Fundación Friedrich Ebert).

De la Garza Toledo, Enrique 2000 “La flexibilidad del trabajo en América Latina”, en De la Garza Toledo, E. (comp.) *Tratado latinoamericano de la sociología del trabajo* (México D. F.: El Colegio de México/FLACSO/UAM/Fondo de Cultura Económica).

Dunkerley, James 1992 “Political Transition and Economic Stabilization: Bolivia, 1982-89”, en Dunkerley, J. (comp.) *Political Suicide in Latin America* (London: Verso).

Eckstein, Susan 1976 *The Impact of Revolution: A Comparative Analysis of Mexico and Bolivia* (London: Sage Publications).

Eckstein, Susan 1983 “Transformation of a ‘Revolution from Below’: Bolivia and International Capital.” En *Comparative Studies in Society and History* Vol. 1, N° 25: 105-135.

Eckstein, Susan 1985 “Revolutions and the Restructuring of National Economies: The Latin American Experience.” En *Comparative Politics* N° 17: 473-94.

Escobar, Filemón 1984 *Testimonio de un militante obrero* (La Paz: HISBOL).

Escobar de Pabón, Silvia 2000 *Dinámica productiva y condiciones laborales en el sector minero* (La Paz: CEDLA).

Escobar de Pabón, Silvia 2001 *Desigualdad, exclusión social y pobreza en Bolivia* (La Paz: CEDLA).

French, John D. y Daniel James (comps.) 1997 *The Gendered Worlds of Latin American Women Workers: From Household and Factory to the Union Hall and Ballot Box* (Durham and London: Duke University Press).

García Linera, Alvaro 1999 *Reproletarización: nueva clase obrera y desarrollo del capital industrial en Bolivia (1952-1998)* (La Paz: Muela del Diablo).

García Linera, Alvaro 2000 “Procesos de trabajo y subjetividad en la formación de la nueva condición obrera en Bolivia”, en Calderón, F. (comp.) *Culturas obreras y empresariales* (La Paz: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD).

García Linera, Alvaro 2001 “Sindicato, multitud y comunidad: movimientos sociales y formas de autonomía política en Bolivia”, en A. García, R. Gutiérrez, R. Prada, F. Quispe y L. Tapia (comps.) *Tiempos de rebelión* (La Paz: Muela del Diablo).

- Gittleman, Maury; Michael Horrigan y Mary Joyce 1998 “‘Flexible’ Workplace Practices: Evidence from a Nationally Representative Survey.” En *Industrial & Labor Relations Review* Vol. 1, N° 52: 99-115.
- Godoy, Ricardo A. 1990 *Mining and Agriculture in Highland Bolivia: Ecology, History and Commerce Among the Jukumanis* (Tucson: University of Arizona Press).
- González de la Rocha, Mercedes 1999 *Private Adjustments: Household Responses to the Erosion of Work* (Geneva: UNDP/SEPED).
- Grebe López, Horst 1998 *Los efectos económicos de la globalización en Bolivia: notas para una reflexión estratégica* (La Paz: CEDLA).
- Green, Duncan 1995 *Silent Revolution: The Rise of Market Economics in Latin America* (London: Latin America Bureau).
- Harrison, Bennett 1997 *La empresa que viene: la evolución del poder empresarial en la era de la flexibilidad* (Barcelona: Paidós).
- Harvey, David 1989 *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change* (Cambridge: Basil Blackwell).
- Hodson, Randy 1991 “The Active Worker: Compliance and Autonomy at the Workplace.” *Journal of Contemporary Ethnography* Vol. 20, N° 1: 47-78.
- Hsiung, En Ping-Chun 1996 *Living Rooms as Factories: Class, Gender and the Satellite Factory System in Taiwan* (Philadelphia: Temple University Press).
- Klein, Emilio y Víctor Tokman 2000 “La estratificación social bajo la tensión de la globalización.” En *Revista de la CEPAL* N° 72: 7-30.
- Klein, Herbert 1992 *Bolivia: The Evolution of a Multi-Ethnic Society* (New York: Oxford University Press).
- Kofas, Jon V. 1995 “The Politics of Austerity: The IMF and U.S. Foreign Policy in Bolivia, 1956-1964.” *The Journal of Developing Areas* N° 29: 213-236.
- Kruse, Tom 1999 *Procesos productivos y condiciones laborales en la industria cochabambina* (La Paz: CEDLA).
- Kruse, Tom 2000 “Procesos productivos e identidades sociales: cambios en dos escenarios en Cochabamba, Bolivia”, ponencia presentada en el III Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo *El trabajo en los umbrales del Siglo XXI* (Buenos Aires) 17 al 20 de Mayo.

- Lautier, Bruno 1999 "Por uma sociologia da heterogeneidade do trabalho." En *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo* Vol. 5, N° 9: 7-32.
- Lazarte Rojas, Jorge 1989 *Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia: Historia de la COB 1952-1987* (La Paz: ILDIS).
- Lazarte Rojas, Jorge 2000 "Cultura política, democracia e inestabilidad", en Lazarte Rojas, J. (comp.) *Entre dos mundos: la cultura política y democrática en Bolivia* (La Paz: Plural).
- Luykx, Aurolyn 1999 *The Citizen Factory: Schooling and Cultural Production in Bolivia* (Albany: State University of New York Press).
- Malloy, James y Eduardo Gamarra 1988 *Revolution and Reaction: Bolivia 1964-1985* (New Brunswick: Transaction Books).
- Mantilla, Julio 1989 *Análisis de la Nueva Política Económica: la pedagogía de lo antinacional* (La Paz: UMSA).
- Martínez de Bujo, Federico 1998 *Empleo, productividad e ingresos. Bolivia (1990-1996)* (Lima: Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)/Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, ACIDI).
- Molyneux, Maxine 2000 "Twentieth Century State Formation in Latin America", en Dore, E. y M. Molyneux (comps.) *Hidden Histories of Gender and the State in Latin America* (Druham and London: Duke University Press).
- Morales, Juan Antonio y Jeffrey D. Sachs 1989 "Bolivia's Economic Crisis", en Sachs, Jeffrey D. (comp.) *Developing Country Debt and the World Economy* (Chicago and London: University of Chicago Press).
- Nash, June 1979 *We Eat the Mines and the Mines Eat Us: Dependency and Exploitation in Bolivian Tin Mines* (New York: Columbia University Press).
- Nash, June 1992 "Interpreting Social Movements: Bolivian Resistance to Economic Conditions Imposed by the International Monetary Fund." En *American Ethnologist* Vol. 2, N° 19: 275-297.
- Nash, June 1992 *I Spent My Life in the Mines: The Story of Juan Rojas, Bolivian Tin Miner* (New York: Columbia University Press).
- Pearse, Andrew 1972 "Peasants and Revolution: The Case of Bolivia, Part II." En *Economy and Society* Vol. 1, N° 4: 399-424.
- Pérez Sáinz, Juan Pablo 2000 "Globalización, informalidad y pobreza en América Central", en Carpio, J.; E. Klein e I. Novacovsky (comps) *Informalidad y exclusión social* (Buenos Aires: Organización Internacional del Trabajo/Fondo de Cultura Económica de Argentina).
- Portes, Alejandro 1995 *En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y*

medición de la economía no regulada (México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 1998 *Informe del desarrollo humano Bolivia 1998* (La Paz: PNUD).

Saraví, Gonzalo A. 1997 “La Microempresa Ante el Nuevo Escenario Productivo: ¿hacia dónde se dirigen las relaciones laborales? Análisis de un Distrito Industrial en México”, ponencia presentada en encuentro del *Latin American Studies Association* (Guadalajara, México) 17 al 19 de Abril.

Schmitter, Philippe C. 1992 “Modos de intermediación de intereses y modelos de cambio social en Europa occidental”, en Schmitter, P. C. y G. Lehmbruch (comps.) *Neocorporativismo I: más allá del estado y el mercado* (México D. F.: Alianza Editorial).

Scott, James 1998 *Seeing Like a State* (New Haven and London: Yale University Press).

Toranzo Roca, Carlos y Mario Arrieta 1989 *Nueva derecha y desproletarización en Bolivia* (La Paz: UNITAS/ILDIS).

Weller, Jürgen 2000 “Tendencias del empleo en los años noventa en América Latina y el Caribe.” En *Revista de la CEPAL* N° 72: 31-52.

Yelvington, Kevin A. 1995 *Producing Power: Ethnicity, Gender, and Class in a Caribbean Workplace* (Philadelphia: Temple University Press).

Notas

1 *La Razón*: “La COB inicia su congreso bajo la amenaza de división y fracaso” (17 de enero de 2000); *Ultima Hora*: “Sectores del bloque anti-neoliberal no volverán al congreso de la COB” (31 de enero de 2000); *Ultima Hora*: “Fracasó el congreso cobista, la crisis sindical se profundiza” (31 de enero de 2000).

2 Todas las traducciones de citas en inglés son del autor.

3 Una indicación es el sufragio: entre las elecciones de 1951 y 1956 el número de votos depositados aumentaría de 120.000 a 960.000 (Pearse, 1972: 402).

4 Eckstein explica que siendo el estaño un material estratégico, para asegurar que Bolivia no saliera del área de influencia de Estados Unidos, este país otorgó a Bolivia per capita más “ayuda” que a cualquier otro país latinoamericano entre 1952 y 1956. De 1957 a 1964 las contribuciones de Estados Unidos sumaban entre el 15% y el 32% de los ingresos del gobierno. Con el gol-

pe militar de 1964, la represión de la COB y el desvanecimiento de la “amenaza subversiva”, esta “ayuda” cayó a menos del 5% de los ingresos del estado. “Paradójicamente”, la “ayuda” de Estados Unidos al gobierno “revolucionario” boliviano se justificaría como muro de contención contra la subversión; al mismo tiempo esta “ayuda” reconstruiría el ejército boliviano, que en 1964 tumbaría dicho gobierno (Eckstein, 1976: 37).

5 La COB se fundó el 16 de abril de 1952, a los 7 días del triunfo de la revolución (Lazarte Rojas, 1989: 5).

6 Aunque insistiríamos en el carácter “social” de la experiencia corporativista en Bolivia hasta 1985. Por cierto, un intento de dominación desde arriba, no obstante el corporativismo, se destacaba por el real grado de independencia política de las entidades corporativas (en formular sus agendas, seleccionar líderes, etc.). En su comparación con el caso mexicano, Eckstein indica, “el gobierno nunca logró con éxito controlar a las organizaciones sindicales, ni por medio de la cooptación, ni por la fuerza. Cada vez más los sindicatos desafiaban al régimen y retiraban su apoyo al MNR. (...) Si la economía hubiera sido más diversificada, como en el caso mexicano, la pérdida del respaldo de los mineros hubiera sido menos crítica al partido y al gobierno” (Eckstein, 1976: 33).

7 Aunque la minería producía pérdidas, mientras -y en razón de que- el gobierno desviaba inversiones al petróleo (Kofas, 1995: 230) y a la agroindustria del oriente del país (Eckstein, 1983: 110-114).

8 Banzer heredó menos de 500 millones en deuda externa, y dejó más de 2,5 mil millones; al principio del gobierno de la UDP la deuda era más de 300% de las exportaciones (Malloy y Gamarra, 1988: 101).

9 En 1984 el mismo presidente Siles iniciaría una huelga de hambre, para llamar a la ciudadanía a la “reflexión”.

10 Dijo Gonzalo Sánchez de Lozada: “tiene que ver con la creación de instrumentos [de poder] que parecen ser instrumentos de mercado, para que los líderes, el gobierno, y el partido no queden como responsables de cada ajuste de la economía, pero a la vez controlar [el proceso]; en otras palabras, tirar piedras sin sacar la cara” (Mantilla, 1989: 35).

11 Ver CEDLA (1999) para una revisión del legado del ajuste estructural.

12 Calla afirma correctamente que es más preciso hablar ahora en plural. Ver Calla (2000).

13 Arze Vargas (2000), y comunicación personal con Carlos Villegas, CEDLA, La Paz.

14 “[U]na esperanza liberadora del trabajo humano de su carácter enajenado,

rutinario, con escaso control del trabajador sobre el mismo, fuente de nuevos consensos e identidades con la empresa” (de la Garza Toledo, 1997).

15 Kruse (2000) y comunicación personal con Fernanda Wanderley, La Paz, y Lourdes Montero, Santa Cruz.

16 A esto se tiene que agregar la economía de la coca y la cocaína, estimada en entre \$150 y \$500 millones al año sólo en la región cochabambina (entre el 15% y el 50% de las manufacturas nacionales), que en opinión de muchos ha subvencionado la transición y el ajuste. Ver Dunkerley (1992).

17 Sobre la metodología de este ejercicio, ver CEDLA e ILDIS (1996: 77-78).

18 Ciudades del eje y El Alto (Arze Vargas, 2000: 48, 51).

19 “que realizan en su generalidad trabajo manual y esfuerzo físico” (Arze Vargas, 2000:48).

20 “que realizan trabajo intelectual y/o de escritorio a cambio de una remuneración” (Arze Vargas, 2000:48).

21 Incluye salud y educación.

22 Incluye servicios financieros, minería y agricultura.

23 Aunque faltan estudios sistemáticos al respecto, existe amplia información. El presente se basa en los primeros 10 números de la *Alerta Laboral* de CEDLA (disponibles en www.cedla.org), y en varios años de trabajo directo con la Federación de Fabriles de Cochabamba.

24 Estas formas de acomodamiento y “resistencia” –el *foot dragging*, las ventilaciones y conflictos entre trabajadores, el chisme como mecanismo de ganar posicionamiento marginal ante un patrón a expensas de otros trabajadores, etc.– lejos de subvertir la hegemonía del régimen laboral, pueden conllevar su reproducción. Ver Hodson (1991) y Hsiung (1996: cap. 6) para una rica exploración de este tema. Para el mismo fenómeno en el ámbito escolar boliviano, ver Luykx (1999: 279-291), especialmente la sección “What counts as resistance?”.

25 Ser nómada por lo general corresponde a la juventud. Nuestros estudios sugieren que cuando llega el momento en el ciclo vital de conformar una familia, y volverse “sedentario” -lo que llaman los jóvenes “sentar cabeza”- por lo general pasa no por conseguir trabajo asalariado, sino por emprender un negocio o taller propio.

26 Basado en Arze (2000: 54-66) y con elaboraciones mías.

27 Ver *Ultima Hora*, del 24 de enero de 2000, donde un dirigente “aclaró que

no se pretende crear un ente paralelo a la COB sino trabajar desde las bases para fortalecer el movimiento sindical”.

28 Seudónimo.

29 355 bolivianos, o aproximadamente US\$ 56 por mes.

30 Inclusive el presente autor.

31 Señalamos dos instancias arriba: las experiencias con co-gobierno y co-gestión (Malloy y Gamarra, 1988), y el “efecto estatizante” del sindicalismo cuyo referente central es el estado (García Linera, 2001).

32 En este sentido, sugerimos que se puede hablar de un “sindicalismo clasista” por excelencia (de la Garza Toledo, 2000: 176), pero a la vez entendible en una configuración corporativista en su variante más “social” (Molyneux, 2000:78, nota 53).

33 El concepto aquí de “narrativa maestra” (*master narrative*) es prestado de Borneman. Explica el autor: “Narrativas maestras sirven para permitir a los individuos ordenar su experiencia alrededor de la repetición de figuras condensadas (*tropes*) específicas, integrando así el curso de vida a una historia coherente, en tanto constituyendo un sujeto significado. En la medida en que las narrativas maestras son invocados [*appealed to*] por diferentes sujetos, se vuelven instrumentos para la producción de cohesión social y posiblemente nacional” (Borneman, 1992: 46).

34 En el ámbito productivo, ver el caso fascinante de la minería informal -el *jukeo*- dentro de las minas estatales, y articulado a los sindicatos mineros (Escobar, 1984: 26; Godoy, 1990: 97); en el ámbito socio-político basta revisar los participantes en los Congresos de la COB, sobre todo el IV° (1970), el V° (1979) y el VI° (1984). (Lazarte Rojas, 1989: 45-80).

35 De las más de 250 tesis de licenciatura en economía aprobadas desde el “ajuste” en la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba, sólo 10 abordaron temas del trabajo: de éstas, sólo 4 en áreas urbanas.

36 Típico en este sentido son exploraciones del problema de la “governabilidad” (Calderón and Toranzo Roca, 1996).

